



SECRETARÍA  
JURÍDICA  
DISTRITAL



## Sección Internacional

---

### Entrevista con el experto Internacional en cambio climático **Randall Abate**

---

Entrevista a **Randall Abate**<sup>1</sup>: Vicedecano de Estudios de Derecho Ambiental y Profesor Titular de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Experto en cambio climático, medio ambiente y protección de generaciones futuras.

Sus principales intereses de investigación han sido el derecho y la justicia relacionados con el cambio climático. Abate ha publicado seis libros y más de 40 artículos y capítulos en revistas jurídicas. Es autor de *"Cambio climático y los sin voz: Protección de las generaciones futuras, la vida silvestre y los recursos naturales"* (Cambridge University Press, 2019). En 2024, publicó dos artículos en revistas jurídicas sobre gobernanza de la migración climática y ha impartido conferencias en todo el mundo sobre temas relacionados con la migración climática durante la última década.

---

1 Randall S. Abate es el Vicedecano de Estudios de Derecho Ambiental y Profesor Titular de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Antes de unirse a GW Law en julio de 2022, ocupó cargos docentes a tiempo completo durante tres décadas en seis facultades de Derecho en Estados Unidos. Con un enfoque principal en el derecho y la justicia climática, el Decano Abate ha publicado seis libros y más de 40 artículos en revistas jurídicas y capítulos de libros. Es autor de *Climate Change and the Voiceless: Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources* (Cambridge University Press, 2019). Publicó dos artículos jurídicos coescritos sobre la gobernanza de la migración climática en 2024 y ha ofrecido conferencias en todo el mundo sobre este tema durante la última década.

## Doctrina Distrital (DD)

**Randall Abate (RA)**

---

### Versión en Español

#### **DD: ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los gobiernos para gestionar la migración climática?**

**RA:** La crisis de la migración climática presenta múltiples dimensiones. En primer lugar, el desplazamiento transfronterizo (de un país hacia otro) constituye el desafío más complejo, ya que requiere marcos de cooperación internacional que actualmente no se encuentran debidamente desarrollados. Además, existe la preocupación de que las naciones insulares de baja altitud en el Pacífico Sur puedan perder su estatus como Estados dentro del sistema de Naciones Unidas si sus territorios se tornan inhabitables a causa del aumento del nivel del mar. Cabe recordar que, conforme al derecho internacional, la existencia de un "territorio" es uno de los cuatro criterios para determinar la condición de Estado, junto con una "población", un "gobierno" y la "capacidad para entablar relaciones internacionales".

En segundo lugar, a nivel interno, los marcos jurídicos vigentes a menudo requieren ser ajustados para proteger a las comunidades amenazadas por desplazamientos climáticos. Por ejemplo, en la legislación estadounidense, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) no tiene facultades para actuar hasta que ocurre un desastre climático. Es necesario reformar estas competencias para permitir que el gobierno federal intervenga cuando las comunidades enfrenten un riesgo inminente y elevado de desplazamiento, de modo que puedan ser reubicadas preventivamente, antes de que se materialice el desastre.

En tercer lugar, tanto a nivel internacional como nacional, existen numerosos obstáculos de carácter conceptual para abordar la migración climática. Primero, es preciso definir cómo

denominar a las personas desplazadas por el clima: ¿deberían ser calificadas como refugiados climáticos, migrantes climáticos, personas desplazadas por el clima, u otra categoría? Segundo, es fundamental precisar qué grado de influencia deben tener los factores climáticos para que estas personas puedan acceder a protección. La terminología inicial fue "desplazamiento inducido por el clima", pero ha evolucionado hacia "desplazamiento relacionado con el clima", en reconocimiento de que las comunidades desplazadas a menudo enfrentan también factores socioeconómicos y culturales. Tercero, es necesario determinar qué tipo de desplazamiento da derecho a protección: ¿se considerarán únicamente los desplazamientos permanentes, o también aquellos de carácter temporal?

#### **DD: ¿Qué políticas y estrategias han sido eficaces para abordar la migración inducida por el cambio climático?**

**RA:** Dado que se trata de un ámbito emergente de la gobernanza, aún es difícil evaluar la eficacia de las medidas implementadas. Sin embargo, es posible identificar qué acciones se han adoptado y cuáles podrían adoptarse. La estrategia más habitual hasta la fecha ha sido recurrir a los tribunales nacionales e internacionales para que las personas desplazadas por el clima busquen protección. Tanto las cortes como los organismos de derechos humanos han reconocido que estas personas merecen, en cierta medida, protección bajo principios de derechos humanos, aunque el marco jurídico todavía está en evolución.

Las soluciones legislativas probablemente sean más eficaces. Por ejemplo, Alemania propuso un sistema de pasaportes climáticos que permitiría a los ciudadanos de otros países de la Unión Europea recibir protección temporal

en Alemania si factores climáticos provocan su desplazamiento. De manera similar, en la legislación estadounidense sobre asilo, mecanismos ya existentes como el "Estatus de Protección Temporal" podrían extenderse para brindar protección provisional a los desplazados climáticos. No obstante, el desafío de estas iniciativas radica en que suelen ofrecer únicamente una protección de corto plazo. Se requieren nuevos marcos normativos, tanto internacionales como nacionales, que atiendan los procesos de reasentamiento a largo plazo de las personas desplazadas por el cambio climático.

**DD: ¿Cómo pueden colaborar los países a nivel internacional para fortalecer la gobernanza de la migración climática?**

**RA:** Uno de los desafíos comunes en la gestión de la migración climática es la financiación. Este proceso será sumamente costoso. Por ello, deben establecerse mecanismos de financiación, tanto internacionales como nacionales, específicamente destinados a cubrir los costos de reubicación y reasentamiento de las personas desplazadas por el clima. Existen actualmente fondos para promover la adaptación climática, pero es necesario que cuenten con fuentes de financiamiento específicas para la migración climática, diferenciadas de otros gastos relacionados con la adaptación, como la construcción de diques, la restauración de humedales o la implementación de medidas de mitigación de incendios forestales.

**DD: ¿Qué papel desempeñan las comunidades locales en la gestión de la migración climática y cómo pueden recibir un mayor apoyo?**

**RA:** En Estados Unidos, se reconoce cada vez más la importancia de las "comunidades receptoras",

es decir, aquellas ciudades dispuestas a acoger a personas desplazadas por el clima. Estas ciudades están más protegidas frente a los impactos más graves del cambio climático y a menudo se las denomina "refugios climáticos". Algunas de estas ciudades que han manifestado interés en ser comunidades receptoras son Duluth (Minnesota), Buffalo (Nueva York) y Cincinnati (Ohio). Duluth incluso se ha autodenominado "Duluth a prueba de clima" para subrayar su disposición a recibir personas desplazadas por el cambio climático. Estas comunidades receptoras deberían ser elegibles para recibir fondos federales y estatales que fortalezcan su capacidad de acoger a los nuevos residentes.

**DD: Bogotá, una capital de aproximadamente 8 millones de habitantes, ha recibido históricamente migrantes debido a la violencia y factores económicos. ¿Qué medidas podría adoptar para proteger los derechos humanos de los migrantes climáticos?**

**RA:** Las ciudades son destinos primarios para las poblaciones desplazadas, aunque a menudo carecen de la infraestructura, la vivienda y los servicios necesarios para absorber flujos abruptos y masivos de personas desplazadas. Las poblaciones desplazadas por el clima que llegan a las áreas urbanas tienden a concentrarse en las periferias, donde las oportunidades de empleo son limitadas y la infraestructura básica es insuficiente. Estas comunidades improvisadas que se asientan en zonas ambientalmente inestables enfrentan riesgos agravados en términos de vulneraciones a los derechos humanos, tales como el acceso precario a alimentos, agua potable y refugio adecuado.

Para reducir estas potenciales violaciones a los derechos humanos, las ciudades deben cerrar

las brechas que dificultan la construcción de una comunidad integrada entre la población anfitriona y la población migrante. La integración de las personas desplazadas requiere políticas de cohesión cultural y social que promuevan la inclusión y la adaptación mutua entre desplazados y residentes locales.

Ciudades como Bogotá pueden aumentar el acceso a vivienda asequible, educación y oportunidades de empleo para estas comunidades desplazadas por el clima. Las alianzas público-privadas pueden generar empleo que, a la vez, facilite la adaptación climática. Por ejemplo, el proyecto de Corredores Verdes de Medellín transformó calles y espacios vacíos en infraestructura verde. Gracias a la colaboración entre el gobierno local y contratistas privados, esta iniciativa generó empleo para residentes de bajos ingresos en tareas de jardinería y mantenimiento, ofreciendo así una solución “ganar-ganar” que redujo la pobreza mientras promovía la adaptación al cambio climático.

### **English Version**

Interview to **Randall Abate<sup>2</sup>**: Assistant Dean for Environmental Law Studies and a Professorial Lecturer in Law at the George Washington University Law School.

His main research interests have been climate

---

<sup>2</sup> Randall S. Abate is the Assistant Dean for Environmental Law Studies and a Professorial Lecturer in Law at the George Washington University Law School. Prior to joining GW Law in July 2022, he held full-time law teaching positions for three decades at six U.S. law schools. With a primary focus on climate change law and justice, Dean Abate has published six books and more than 40 law journal articles and book chapters. He is the author of *Climate Change and the Voiceless: Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources* (Cambridge University Press, 2019). He published two co-authored two law journal articles on climate migration governance in 2024 and has lectured around the world on climate migration issues for the past decade.

change law and justice. Abate has published six books and over 40 articles and chapters in law journals. He is the author of “Climate Change and the Voiceless: Protecting Future Generations, Wildlife, and Natural Resources” (Cambridge University Press, 2019). In 2024, he published two law journal articles on climate migration governance and has lectured worldwide on climate migration-related topics for the past decade.

### **DD: What are the primary challenges governments face in managing climate migration?**

**RA:** The climate migration crisis has many dimensions. First, transboundary displacement (from one country into another country) is the most daunting challenge because it requires frameworks for international cooperation that are not yet in place. There are also concerns that low-lying island nations in the South Pacific may lose their status as states under the UN system when their territories are no longer habitable due to sea level rise. Having a “territory” is one of the four criteria used to determine statehood under international law, along with having a “population,” a “government,” and the “capacity to enter into foreign relations.”

Second, at the domestic level, existing legal frameworks often need to be adapted to help protect communities in danger of climate displacement. For example, under U.S. law, the Federal Emergency Management Agency (FEMA) is not authorized to intervene until after climate-related disaster strikes. FEMA’s authority needs to be adjusted to enable the federal government to respond when communities face a high risk of imminent climate-related displacement so that such communities can be moved out of harm’s

way before disaster strikes.

Third, at the international and domestic levels, there are many definitional obstacles in addressing climate migration. The first issue is determining what designation to assign these displaced peoples: should it be climate refugees, climate migrants, climate displaced peoples, or some other term? The second issue is determining what role must climate-related factors play to be eligible for protection. The terminology was originally “climate-induced displacement,” but it has shifted to “climate-related displacement” to account for the reality that other socioeconomic and cultural factors often are at play when communities are forced to relocate. The third issue is determining the type of displacement that is eligible for protection, i.e., can temporarily displaced peoples receive legal protection or must the displacement be permanent?

**DD: Which policies and strategies have been effective in addressing climate-induced migration?**

**RA:** This area of governance is new, so it is difficult to assess what has been effective, but I can address what has been employed and what can be employed. The most common approach to date in several countries has been for climate displaced individuals to seek protection in court systems. Courts and human rights bodies at the international and domestic levels have recognized that some degree of human rights-based protections should apply to climate displaced peoples, but the law is still evolving.

Legislative approaches are likely to be more effective. For example, Germany proposed a climate passport system that would enable citizens

of other countries in the EU to receive temporary protection in Germany if climate-related factors cause them to be displaced from their home countries. A similar opportunity is available under U.S. asylum law, whereby existing legal protections such as “Temporary Protected Status” could be applied to offer temporary protection for climate displaced peoples. The challenges with all of these approaches is that they typically would provide only short-term protection. New international and domestic laws need to be implemented to address the long-term resettlement process for climate displaced peoples.

**DD: How can countries collaborate internationally to strengthen climate migration governance?**

**RA:** One common challenge in managing climate migration is funding. This process will be very expensive. There should be funding mechanisms at the international and domestic levels earmarked to support the costs associated with relocating and resettling climate displaced peoples. There are funds available to promote climate adaptation and these funds need to have specific revenue streams focused on climate migration as distinct from other climate adaptation costs such as building sea walls, restoring wetlands, and applying wildfire mitigation measures.

**DD: What role do local communities play in managing climate migration, and how can they be better supported?**

**RA:** In the United States, there is growing awareness of the need for “receiving communities,” which are cities that are interested in receiving climate displaced peoples. These cities are more protected from the most severe climate

change impacts and are sometimes referred to as “climate havens.” Cities in the United States that have expressed interest in serving as receiving communities include Duluth, Minnesota; Buffalo, New York; and Cincinnati, Ohio. Duluth even gave itself a catchy nickname, “climate-proof Duluth” to help convey its receptivity to receive climate displaced peoples. Receiving communities should be eligible for federal and state funding to ensure that they have the capacity to support the influx of new residents.

**DD: Bogotá, a capital city of approximately 8 million people, has historically received migrants due to violence and economic factors. What measures could it take to protect the human rights of climate migrants?**

**RA:** Cities are primary destinations for displaced populations, yet cities often lack the infrastructure, housing, and services to accommodate abrupt and large influxes of displaced peoples. Climate-displaced populations that arrive in urban areas tend to cluster in urban peripheries, where job opportunities are scarce and basic infrastructure is lacking. Makeshift communities of displaced peoples in these environmentally unstable areas face heightened risks of human rights impacts such as diminished access to food, safe drinking water, and adequate shelter.

To reduce potential human rights violations, cities need to close the gaps that prevent the host community and the migrant community from building a new community together. Integration of displaced populations into host communities requires cultural and social cohesion policies to promote inclusivity and mutual adaptation between displaced persons and local residents.

Cities like Bogota can provide increased access to affordable housing, education, and employment opportunities for these climate-displaced communities. Public-private partnerships can create jobs that facilitate climate adaptation. For example, the Medellín Green Corridors project transformed roads and vacant spaces into green infrastructure. Through collaboration between the city government and private contractors, this initiative provided employment for low-income residents in landscaping and maintenance, creating a “win-win” outcome in reducing poverty while promoting climate adaptation.